

C. VALENCIANA

Los regantes reclaman 200 millones en obras para desbloquear el plan del Júcar

D. MARTÍNEZ | D. MARTÍNEZ / ALICANTEALICANTE
Día 17/06/2013

El Consell intenta facilitar un acuerdo a múltiples bandas para que el Ministerio pueda sacar a exposición pública el documento a finales de mes y aprobarlo en 2014El Consell intenta facilitar un acuerdo a múltiples bandas para que el Ministerio pueda sacar a exposición pública el documento a finales de mes y aprobarlo en 2014

el Consell y los regantes de las provincias de Valencia y Alicante se afanan en alcanzar un acuerdo satisfactorio a múltiples bandas –incluidas las instituciones y los usuarios castellano-manchegos– que permita desbloquear la aprobación del plan de cuenca del Júcar. Como ha publicado ABC, el retraso del instrumento de planeamiento de la cuenca, que debía haberse terminado en 2009, podría llegar a costarle al Gobierno de España una multa de 200.000 euros por día de retraso si Bruselas decide ejecutar la sanción, lo que supone 72 millones de euros por año.

El acuerdo que permita desbloquear el plan y sortear esa posible sanción (en cualquier caso, el documento no entraría en vigor antes de finales de año), que pasa por satisfacer las demandas de los regantes de Valencia, Alicante y Castilla-La Mancha, tiene en cambio un coste de entre 200 y 250 millones de euros, según las fuentes consultadas. Un coste, eso sí, que podría financiarse vía tarifa, y que de esta forma se cargaría a los regantes.

Según las fuentes consultadas por ABC, tres son las grandes cuestiones que mantienen paralizado el plan de cuenca –de hecho, existe un borrador donde no se ha fijado todavía el reparto de caudales, dado que éste dependerá del acuerdo que se alcance–. La primera, el trasvase Júcar-Vinalopó: los regantes alicantinos rechazan el agua de la toma en la desembocadura y reclaman la vuelta a la conexión original, derogada con la llegada del PSOE al Gobierno en 2004. El Gobierno llegó a iniciar los contactos para retomar dicha conexión, pero en los últimos meses estos se han «enfriado».

Vuelta a la toma original

La vuelta a la toma original, como ha publicado ABC, costaría unos 60 millones de euros, dado que la conexión existe físicamente, y solo sería necesario terminar la conducción desde la presa de Cortes de

Pallás hasta el trazado actual del trasvase. Los regantes del Vinalopó se han mostrado dispuestos a correr con los gastos a través de la tarifa que deberán pagar a Acuamed por cada metro cúbico trasvasado.

La segunda gran cuestión, y que facilitaría el visto bueno de los regantes valencianos a la recuperación de la toma original, es la modernización de regadíos tradicionales en el Júcar. Una obra que se ha convertido en una reivindicación histórica, pero que en el transcurso de los años ha ido quedando postergada. En cuanto a los regantes castellano-manchegos, su principal inquietud es la sustitución de bombeos en la Mancha Oriental. Estas dos actuaciones, junto con el trasvase Júcar-Vinalopó original, suman los citados 200-250 millones.

Equilibrio de fuerzas

Los regantes consideran que se trata más de un problema de financiación que de disponibilidad presupuestaria, dado que se han prestado a sufragar el coste de las obras vía tarifa. Es decir, el Ministerio no tendría que cargar con el coste, pero sí conseguir la financiación para ejecutar las obras, que se cobrarían en diferido.

Sobre el papel, el plan de cuenca tiene que salir a exposición pública a finales de mes, para estar aprobado a finales de año. No obstante, la batalla se libra ahora sobre el decreto de demarcación. Como ha publicado este periódico, si las cuencas endorreicas (sin salida al mar) de Albacete se «convierten» en cuenca del Júcar, alterarían el equilibrio de poderes y pondrían en riesgo el resultado de las negociaciones que se llevan a cabo.

el Consell y los regantes de las provincias de Valencia y Alicante se afanan en alcanzar un acuerdo satisfactorio a múltiples bandas –incluidas las instituciones y los usuarios castellano-manchegos– que permita desbloquear la aprobación del plan de cuenca del Júcar. Como ha publicado ABC, el retraso del instrumento de planeamiento de la cuenca, que debía haberse terminado en 2009, podría llegar a costarle al Gobierno de España una multa de 200.000 euros por día de retraso si Bruselas decide ejecutar la sanción, lo que supone 72 millones de euros por año.

El acuerdo que permita desbloquear el plan y sortear esa posible sanción (en cualquier caso, el documento no entraría en vigor antes de finales de año), que pasa por satisfacer las demandas de los regantes de Valencia, Alicante y Castilla-La Mancha, tiene en cambio un coste de entre 200 y 250 millones de euros, según las fuentes consultadas. Un coste, eso sí, que podría financiarse vía tarifa, y que de esta forma se cargaría a los regantes.

Según las fuentes consultadas por ABC, tres son las grandes cuestiones que mantienen paralizado el plan de cuenca –de hecho, existe un borrador donde no se ha fijado todavía el reparto de caudales, dado que éste dependerá del acuerdo que se alcance–. La primera, el trasvase Júcar-Vinalopó: los regantes alicantinos rechazan el agua de la toma en la desembocadura y reclaman la vuelta a la conexión original, derogada con la llegada del PSOE al Gobierno en 2004. El Gobierno llegó a iniciar los contactos para retomar dicha conexión, pero en los últimos meses estos se han «enfriado».

Vuelta a la toma original